



# UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

## TRABAJO FIN DE ESTUDIOS

Título

LA ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA EN  
EL CÓDIGO CIVIL

Autor/es

MARÍA ISABEL CAPELLÁN LAVIEJA

Director/es

ÁNGEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

Facultad

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Titulación

Grado en Derecho

Departamento

DERECHO

Curso académico

2016-17



***LA ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA EN EL CÓDIGO CIVIL***, de  
MARÍA ISABEL CAPELLÁN LAVIEJA

(publicada por la Universidad de La Rioja) se difunde bajo una Licencia Creative  
Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported.

Permisos que vayan más allá de lo cubierto por esta licencia pueden solicitarse a los  
titulares del copyright.

© El autor, 2017

© Universidad de La Rioja, 2017

[publicaciones.unirioja.es](http://publicaciones.unirioja.es)

E-mail: [publicaciones@unirioja.es](mailto:publicaciones@unirioja.es)



**UNIVERSIDAD  
DE LA RIOJA**

# **LA ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA EN EL CÓDIGO CIVIL**

María Isabel Capellán Lavieja

Tutor: Prof. Dr. Ángel Sánchez Hernández

**FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES**

**TRABAJO DE FIN DE GRADO**

**GRADO EN DERECHO**

**CURSO ACADÉMICO 2016-2017**

***“Artículo 5. Son españoles:***

***Primero. Todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las  
España, y los hijos de éstos.***

***Segundo. Los extranjeros que hayan obtenido de las Cortes carta de naturaleza.***

***Tercero. Los que sin ella lleven diez años de vecindad, ganada según la ley en  
cualquier pueblo de la Monarquía.***

***Cuarto. Los libertos desde que adquieran la libertad en las España”.***

(Artículo 5, Constitución de Cádiz de 1812)

## **RESUMEN / ABSTRACT.**

### **Resumen:**

El presente Trabajo de Fin de Grado trata de las distintas vías previstas en el Código Civil para la adquisición de la nacionalidad española.

Tras una introducción, se analizan los siguientes aspectos: el concepto de nacionalidad, la distinción entre nacionalidad y ciudadanía, la cualidad de nacional, la nacionalidad como posible derecho fundamental, la nacionalidad como materia indisponible, la relación entre nacionalidad y Registro Civil y la prueba de la nacionalidad. Posteriormente, se alude a las fuentes del derecho español respecto a la nacionalidad, así como a la adquisición de la nacionalidad española distinguiendo entre españoles de origen y los que no son españoles de origen. Se analizan los requisitos comunes para la adquisición de la nacionalidad mediante la opción, la carta de naturaleza y la residencia. Por último, se hace referencia a la nacionalidad de las Corporaciones, Fundaciones y Asociaciones. El Trabajo termina con unas conclusiones y una relación de bibliografía, legislación, jurisprudencia y anexo.

### **Abstract:**

The current Final Degree Project deals with the different ways to acquire the Spanish nationality following the Spain's Civil Code. After an introduction, the aspects which are going to be analyzed are: the concept of nationality, the distinction between nationality and citizenship, the quality of the native, nationality as a possible fundamental right, the nationality as an unavailable matter, the relationship between nationality and Civil Registration, and the nationality proof. Later on, the sources of the Spanish Law are mentioned with regard to the nationality, as well as to the acquisition of the Spanish nationality; we will make a distinction between Spanish of origin and non-origin Spanish. The common requirements for the acquisition of nationality are analyzed by means of the "opción" (option), the "carta de naturaleza" (letter of nature) and the "residencia" (residence). Finally, there is one reference to the nationality of the Corporations, Foundations and Associations. The project ends with a few conclusions, the bibliography, legislation, jurisprudence and an appendix.

# ÍNDICE

<b>Abreviaturas</b> .....	5
<b>1 – Introducción</b> .....	6
<b>2 – La nacionalidad</b> .....	9
2.1 – Concepto .....	9
2.2 – Distinción entre nacionalidad y ciudadanía; nacionalidad y vecindad civil; nacionalidad y vecindad administrativa .....	11
2.3 – La cualidad de nacional y la competencia estatal .....	13
2.4 – La nacionalidad, ¿es un derecho fundamental? .....	14
2.5 – La nacionalidad como materia indisponible .....	16
2.6 – Registro Civil y prueba de la nacionalidad .....	16
<b>3 – Fuentes del Derecho Español de la nacionalidad</b> .....	18
3.1 – Constitución Española .....	18
3.2 – Código Civil .....	19
<b>4 – La adquisición de la nacionalidad española</b> .....	19
4.1 – La nacionalidad española de origen .....	20
4.1.1 – Nacionalidad española de origen automática .....	20
a) Criterio del <i>ius sanguinis</i> .....	20
b) Criterio del <i>ius soli</i> .....	22
4.1.2 – Nacionalidad española de origen por opción .....	24
4.2 – La nacionalidad española no originaria .....	26
4.2.1 – Opción .....	27
4.2.2 – Nacionalidad española no originaria por naturalización .....	27
a) Carta de naturaleza .....	27
b) Residencia .....	30
4.2.3 – Posesión de estado .....	35
4.3 – Requisitos comunes a la opción, a la carta de naturaleza y a la residencia .....	36
4.4 – Corporaciones, Fundaciones y Asociaciones .....	38
<b>5 – Conclusiones</b> .....	39
<b>Bibliografía</b> .....	42
<b>Legislación</b> .....	43
<b>Jurisprudencia</b> .....	44
<b>Anexos</b> .....	45

## **ABREVIATURAS.**

AN:	Audiencia Nacional.
AP:	Audiencia Provincial.
Art:	Artículo.
Arts:	Artículos.
CC:	Código Civil.
CCAA:	Comunidades Autónomas
CE:	Constitución Española.
DNI:	Documento Nacional de Identidad.
DUDH:	Declaración Universal de Derechos Humanos.
LAI:	Ley de Adopción Internacional.
LBRL:	Ley de Bases de Régimen Local.
LEC:	Ley de Enjuiciamiento Civil.
LO:	Ley Orgánica.
LRC:	Ley del Registro Civil.
P:	Página.
PP:	Páginas.
RRC:	Reglamento del Registro Civil.
TC:	Tribunal Constitucional.
TS:	Tribunal Supremo.
UE:	Unión Europea.

## 1 – INTRODUCCIÓN.

La nacionalidad, como concepto principal para poder entender los modos de adquisición de la misma, engloba dos perspectivas distintas (sociológica y jurídico-política), así como distintas facetas desde las que puede ser tratada (como Estado Civil y status político). Se trata de una cualidad que poseen todas las personas que forman parte de una comunidad nacional.

La distinción entre la nacionalidad y la ciudadanía, resulta relevante e interesante al mismo tiempo, pues se trata de dos conceptos referidos a los habitantes de un país pero que, al mismo tiempo, significan cosas distintas. La nacionalidad es la vinculación que tiene una persona física con su Estado. Por otra parte, el concepto de ciudadanía es distinto del anterior. Ciudadano español es aquel español (titular de pretensiones y derechos frente a los poderes públicos en las condiciones que establece la Ley) y aquel extranjero que, residente en España, la Ley reserva la posibilidad de participar en los procesos electorales municipales (art. 13.2 de la CE). Por tanto, ciudadano es un término que se utiliza para regular la titularidad de ciertas funciones de relevancia pública y que carece, a diferencia de la nacionalidad, de trascendencia en el Derecho Privado.<sup>1</sup>

Respecto a la cualidad de “nacional”, es el Estado quien establece de manera clara los requisitos que deben cumplirse para que una persona pueda ostentar dicha condición y, por tanto, obtener la nacionalidad española y convertirse en nacional español.

El hecho de que la nacionalidad sea una materia tratada, o no, como derecho fundamental da lugar a diversas opiniones al respecto. Es preciso tener en cuenta, en primer lugar, qué se entiende por derecho fundamental y, una vez claro, en segundo lugar, establecer si se trata de un concepto recogido en el elenco de materias de la sección I del Capítulo II del título I de la CE. Varios autores señalan que nos encontramos ante una materia que sí es tratada como derecho fundamental (pese a no encontrarse recogida como tal en la CE). Otros, en cambio, sostienen que no se trata de un derecho fundamental (alegando que no precisa LO para su desarrollo) y que dada su ubicación en el art. 11 de la CE permite dudar de que sea un derecho susceptible de una protección especial mediante recurso de amparo del art. 53 de la CE.

---

<sup>1</sup> PARRA LUCÁN, MARÍA ÁNGELES, *La nacionalidad en “Derecho de la Persona”* (Coordinado por DE PABLO CONTRERAS, PEDRO), Edisofer S.L., Madrid, 2016, p. 176.



Por otra parte, es preciso señalar que la adquisición de la nacionalidad es una materia indisponible, en el sentido de que, en general, no depende de la libre voluntad de las personas, pues se trata de una materia que está taxativamente regulada, con sus requisitos, condiciones, etc. para poder adquirirla.

El Registro Civil es el registro público que realiza, entre otros, actos referentes a la nacionalidad como el hecho de inscribirla. La prueba de la nacionalidad requiere ver si se está en posesión de la misma mediante el certificado de nacionalidad, siendo competente el Encargado del Registro Civil. A pesar de que reglamentariamente<sup>2</sup> se establece que el DNI tiene valor probatorio, por sí solo, para acreditar la nacionalidad española de su titular, esa validez en relación con la prueba de la nacionalidad hay que ponerla en duda porque vulnera el principio de exclusividad de prueba establecido en los arts. 2, 68 y 69 de la LRC respecto de las materias propias de su objeto. Por tanto, hemos de cuestionar el valor probatorio del DNI para acreditar la nacionalidad española por infringir el principio de legalidad y jerarquía consagrado en el art. 9.3 de la CE<sup>3</sup>.

La CE y el CC, son los dos cuerpos legales, por excelencia, donde mayoritariamente se van a recoger los aspectos referentes a la nacionalidad española (aunque también existen otras leyes que complementan y regulan tal materia).

Por “españoles de origen” se entienden aquellos que adquieren la nacionalidad española de forma automática (arts. 17.1<sup>a</sup>.a), b), c), d) y art. 19.1 del CC) o por opción (art. 20.1.c) del CC que se remite al art. 17.2 y al art. 19.2 del CC) y los hijos y nietos de padres originariamente españoles según la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Por otra parte, tienen la nacionalidad española “no originaria”, cumpliendo los requisitos establecidos, aquellos que la adquieren por derecho de opción (arts. 20.1.a) y b) del CC), por naturalización (carta de naturaleza, art. 21.1 del CC y por residencia, art. 21.2 del CC) y por último, por posesión y utilización de la nacionalidad según el art. 18 del CC.

Con la carta de naturaleza se concede la nacionalidad española a personas que tienen una fuerte vinculación con España o son “premiados” con ello por haber conseguido algún mérito. La misma se otorga por el Consejo de Ministros de manera discrecional (art. 21.1 del CC). La residencia (art. 21.2 del CC) es otra de las vías

---

<sup>2</sup> Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del DNI.

<sup>3</sup> PARRA LUCÁN, MARÍA ÁNGELES, *La nacionalidad en “Derecho de la Persona”* (Coordinado por DE PABLO CONTRERAS, PEDRO), Edisofer S.L., Madrid, 2016, p. 198.

previstas. Es la forma más recurrente para la adquisición de la nacionalidad, teniendo que cumplir el interesado con los requisitos de residencia legal y continuada en España durante el tiempo legalmente establecido. Además, el interesado tiene que tener buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española. Con la posesión de estado (art. 18 del CC) el interesado puede consolidar su nacionalidad española al haber tenido fuerte vinculación con ésta, siempre y cuando concurren los requisitos de buena fe, posesión continuada, justo título y título anulado único, inscrito en el Registro Civil que, por sí mismo, es causa de la adquisición de la nacionalidad y que, en un momento posterior, es impugnado. Por último, la opción (arts. 20.1 a) y b) del CC), requiere por parte del interesado optar por la nacionalidad española, ya que ha estado sujeto a la patria potestad de un español o, bien, porque su madre o padre hubiera sido originariamente español o nacido en España.

En último lugar, y no menos importante, es preciso señalar que, además de las personas físicas, las Corporaciones, Asociaciones y Fundaciones también pueden disponer de la nacionalidad española desde el momento en que se constituyan con arreglo a los requisitos legalmente establecidos.

Por tanto, el tema de la adquisición de la nacionalidad española comporta un elenco de aspectos y características importantes que se tratará detenidamente.

## 2 – LA NACIONALIDAD.

### 2.1 – Concepto.

Hablar de la adquisición de la nacionalidad española y los modos previstos para ello no resulta fácil si antes no tenemos en cuenta el concepto de “nacionalidad”. Se trata de un concepto histórico, pues ha presentado diferentes significados a lo largo de la historia, es decir, se ha ido elaborando a lo largo de distintas épocas: cabe mencionar su origen en época romana (*“el status civitatis, que se configura en las fuentes como ciudadanía romana o condición de cives”*)<sup>4</sup>, es decir, en Roma el hombre libre, que era un ciudadano romano (no un peregrino) era miembro de la ciudad-estado, esto es, de la *civitas* romana. Además, ya en la Edad Media empezó a tener importancia el vínculo personal que ligaba al vasallo a su señor y en la época de la Monarquía Absoluta al soberano.

Podemos hablar de nacionalidad desde dos perspectivas diferentes:

La perspectiva sociológica: se trata de una mentalidad subjetiva común que se refiere a un cierto número de personas que están unidas mediante distintos factores de tipo personal como puede ser la raza, el idioma, las costumbres, la religión, el lugar de nacimiento, el linaje, etc., es decir, se trata de una realidad histórica, cultural y social (que es la Nación) que provoca que los individuos se sientan pertenecientes a una “comunidad nacional” determinada.

La perspectiva jurídico-política: la Exposición de Motivos de la Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad, entiende por nacionalidad *“el vínculo político y jurídico que liga a una persona física con su Estado”*, por tanto, nacionalidad es la condición que tienen las personas por pertenecer a un Estado determinado. Además, el Estado debe atenerse al principio de no discriminación de sus súbditos, art. 5.2 del Convenio Europeo sobre Nacionalidad *“Cada Estado parte debe guiarse por el principio de la no discriminación entre sus súbditos, bien sean nacionales de origen o que hayan adquirido la nacionalidad ulteriormente”*.

---

<sup>4</sup> CAZORLA GONZÁLEZ, MARÍA JOSÉ, *La adquisición de la nacionalidad española por descendientes de españoles. Pasado, presente y futuro*, en “Manual Básico de Derecho y ciudadanía española en el exterior” (Director PÉREZ GÁLVEZ, JUAN FRANCISCO), Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2008, p. 26.

Esta perspectiva cuenta con una doble naturaleza: una dimensión pública (título que surge como consecuencia del vínculo entre el Estado y sus nacionales) y una dimensión privada (atribución de un *status* jurídico a las personas que les confiere derechos y obligaciones).

Con todo ello, aunque ambas perspectivas muestran una amplia visión del concepto de nacionalidad, no menos importantes son las dos facetas siguientes.

En primer lugar, la nacionalidad como Estado Civil: se trata de la integración de la persona en su propio Estado, lo que conlleva que tenga derechos y obligaciones. Además, hay que tener en cuenta que todo español tiene la potencialidad de ser titular de todo derecho (cosa que no sucede con el extranjero). La nacionalidad es personalísima.

En segundo lugar, la nacionalidad como status político: a través del vínculo jurídico-político que liga a los nacionales con su Estado, se puede identificar a su población, lo que conlleva que existan obligaciones y deberes con dicho Estado<sup>5</sup>. Solamente los nacionales participan del poder político y son objeto de la llamada “protección diplomática y consular”, disponiendo de una protección específica en casos de extradición.<sup>6</sup>

Por otra parte, el art. 2 de la CE alude a la “*Nación española*” como “*patria común e indivisible de todos los españoles*”, lo que apunta a que la nacionalidad española es la característica que tienen en común todos aquellos que forman la comunidad española. También el art. 11.1 de la CE remite a la Ley estableciendo que “*La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley*” y los derechos que se otorgan como consecuencia de ello deben ser iguales para todos los españoles se encuentren éstos fuera de territorio nacional o dentro, tal y como establece la Ley 40/2006, de 14 de diciembre del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior.

---

<sup>5</sup> Art. 1.2 CE “*La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado*”.

<sup>6</sup> CARRASCOSA GONZÁLEZ, JAVIER, *Derecho español de la nacionalidad. Estudio práctico*, Comares, Granada, 2011, pp 3 y 4.

## **2.2 – Distinción entre nacionalidad y ciudadanía; nacionalidad y vecindad civil; nacionalidad y vecindad administrativa.**

Con respecto a la distinción entre lo que se entiende por “nacionalidad” y “ciudadanía”, ambos términos pueden parecer idénticos, pero se puede ser ciudadano de un país y no nacional del mismo.

Así, el término “ciudadano” se refiere a una persona a quien se reconoce, según la Ley, derechos, libertades y deberes al residir en territorio nacional. Por tanto, en España se considera ciudadano, al español titular de pretensiones y derechos frente a los poderes públicos en las condiciones que establece la Ley, y al extranjero que -residiendo en España- la Ley le otorga la posibilidad de participar en los procesos electorales municipales (art. 13.2 CE). Por tanto, ciudadano es un término que se utiliza para regular la titularidad de ciertas funciones de relevancia pública y que carece, a diferencia de la nacionalidad, de trascendencia en el Derecho Privado.

Por el contrario, con el término nacionalidad nos referimos a, según señala la Exposición de Motivos de la Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad, *“el vínculo político y jurídico que liga a una persona física con su Estado”*, es decir, el término nacionalidad sirve para indicar la vinculación que tiene una persona física, un ente o un bien con el Estado y su Derecho. Un ejemplo, español que vive en Francia y sigue ostentando la cualidad de “nacional” español porque sigue vinculado a España y a su ordenamiento jurídico.

También ostentan nacionalidad los buques y aeronaves, e incluso existe “nacionalidad de obras literarias, cinematográficas...”, lo que no quiere decir que tales entes o cosas formen parte de la población española.

Cabe diferenciar entre “nacionalidad” y “ciudadanía de la UE”. La UE no tiene competencia para regular el modo en que los Estados miembros establecen las vías para reconocer a sus nacionales la nacionalidad, pero *“la ciudadanía europea parece un plus en relación con la nacionalidad de cada uno de los Estados. Es un estatuto particular acordado a los súbditos de los Estados miembros gracias a su nacionalidad”*<sup>7</sup> aunque no supone un desplazamiento de la nacionalidad de los Estados miembros. Se trata de la condición que tiene toda persona que pertenece a un Estado miembro de la UE, lo cual es complementario y no sustitutivo de la cualidad de nacional de dicho Estado.

---

<sup>7</sup> ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, AURELIA, *Nacionalidad Española. Normativa vigente e interpretación jurisprudencial*, Aranzadi, Navarra, 2008, p. 34.

Por tanto, la ciudadanía de la UE no constituye lo que entendemos por el concepto “nacionalidad”, sino que representa directamente un vínculo entre los ciudadanos de los Estados miembros de la UE y la misma UE. El hecho de formar parte de la UE garantiza a los ciudadanos de la misma una serie de derechos y de deberes que están sujetos al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (por ejemplo: sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo, circular libremente por los Estados de la UE, etc).

Otra distinción, es la que diferencia entre nacionalidad y vecindad civil. Ésta, no debe ser confundida con la nacionalidad. La vecindad civil, cuya regulación corresponde al Estado de manera exclusiva, *“es la condición o cualidad de los españoles que determina la aplicabilidad, en cuanto ley personal, de alguno de los ordenamientos civiles coexistentes en nuestro país”*<sup>8</sup>. Es decir, el individuo queda sometido al derecho civil común o al especial o foral en función de su vecindad civil, como señala el art. 14.1 del CC<sup>9</sup>. Dicha vecindad civil designa la ley personal de los españoles, lo que quiere decir que, al tener carácter personalísimo, determina qué derecho civil se les va a aplicar en materia de familia, sucesiones, etc. Cuando un extranjero adquiere la nacionalidad española, deberá optar por una vecindad civil. Según establece el art. 15.1 del CC: *“el extranjero que adquiera la nacionalidad española, deberá optar, al inscribir la adquisición de la nacionalidad, por cualquiera de las vecindades siguientes: la correspondiente al lugar de residencia, la del lugar de nacimiento, la última vecindad de cualquiera de sus progenitores o adoptantes o la del cónyuge”*. Así mismo, el párrafo segundo del susodicho precepto, establece que *“esta declaración de opción se formulará atendiendo a la capacidad del interesado por adquirir la nacionalidad, por el propio optante, por sí o asistido de su representante legal, o por este último”*. Continúa el precepto indicado expresando que *“cuando la adquisición de la nacionalidad se haga por declaración o a petición del representante legal, la autorización necesaria (del Encargado del Registro Civil del declarante) deberá determinar la vecindad civil por la que se ha de optar”*. Por último, el art. 15.2 del CC establece que *“el extranjero que adquiera la nacionalidad por una carta de naturaleza tendrá la vecindad civil que el Real Decreto de concesión determine*

---

<sup>8</sup> PARRA LUCÁN, MARÍA ÁNGELES, *La vecindad civil*, en “Derecho de la Persona, curso de Derecho Civil (1), Volumen II” (Coordinador DE PABLO CONTRERAS, PEDRO), Edisofer S.L., Madrid, 2016, p. 201.

<sup>9</sup> Art. 14.1 CC *“La sujeción al derecho civil común o al especial o foral se determina por la vecindad civil”*.

*teniendo en cuenta la opción de aquél, de acuerdo con lo que dispone el apartado anterior u otras circunstancias que concurran en el peticionario”.*

Por otra parte, la vecindad administrativa es *“la condición de vecino de determinado municipio que se adquiere por la inscripción en un registro administrativo, el Padrón municipal”*<sup>10</sup>, en el que se reside habitualmente, condición que, además pueden adquirir los extranjeros que viven en España, lo que no afecta al derecho civil que se va a aplicar<sup>11</sup>.

Por tanto, la nacionalidad española es, como ya se ha señalado, la condición que ostentan las personas al pertenecer a la comunidad nacional española; mientras que la vecindad civil indica el derecho civil, común especial o foral que se va a aplicar a un español y la vecindad administrativa indica la condición de vecino que tienen las personas al pertenecer a un municipio determinado.

### ***2.3 – La cualidad de nacional y la competencia estatal.***

El art. 149.1.2º de la CE dispone que *“El Estado tiene competencia exclusiva sobre: Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo”*. Por tanto, nos encontramos ante una materia en la cual las CCAA no gozan de poder legislativo. Será el Estado el que establezca de manera particular quiénes son sus nacionales, qué requisitos deben cumplirse para poder adquirir la condición de tal, quiénes no ostentan tal condición, quiénes van a dejar de serlo, etc.

Además, España no está obligada a reconocer sentencias o resoluciones extranjeras que traten sobre la nacionalidad española. El Derecho español puede establecer los casos en que una persona no ostenta la nacionalidad española pero sin especificar su nacionalidad extranjera. Todo ello es consecuencia de que el Estado es el competente en materia de nacionalidad.

Al respecto, se puede señalar, a modo de ejemplo, casos de adopción de un menor de dieciocho años por un español. Para que dicho menor adoptado en el extranjero pueda obtener la cualidad de nacional español, es preciso que dicha adopción *“sea válida en España, esto es, ha de surtir efectos jurídicos similares a los que surte la*

---

<sup>10</sup> PARRA LUCÁN, MARÍA ÁNGELES, *La vecindad civil*, en “Derecho de la Persona, curso de Derecho Civil (I), Volumen II” (Coordinador DE PABLO CONTRERAS, PEDRO), Edisofer S.L., Madrid, 2016, p. 202.

<sup>11</sup> Art 15 LBRL *“Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio en el que resida habitualmente”*, lo que puede comportar derechos y obligaciones, como derecho de sufragio en las elecciones locales.

*adopción plena en España: extinción de los vínculos jurídicos sustanciales entre el adoptado y su familia anterior, carácter irrevocable de la adopción al tratarse de un menor de edad etc*”<sup>12</sup>. En todo caso, no se tendrá en consideración esa adopción con arreglo al Derecho personal del adoptado extranjero, si resultase ser contrario a los principios básicos del ordenamiento jurídico español, por tanto, no aplicando así normas de otros Estados sobre la nacionalidad que afectan a la nacionalidad española.

#### **2.4 – La nacionalidad, ¿es un derecho fundamental?**

¿Es la nacionalidad un derecho fundamental? La respuesta requiere tener en cuenta varios aspectos. En primer lugar, ver qué se entiende por derecho fundamental y, en caso de considerarlo como tal, ver si se encuentra recogido en el elenco de materias tratadas como derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son “*los derechos positivizados y garantizados por la CE, es decir, sin CE no hay derechos fundamentales, estando sus características ligadas a la propia norma que los origina y los fundamenta, que es la C.E*”<sup>13</sup>. Los derechos fundamentales son fuentes inmediatas de derechos y obligaciones teniendo una doble vertiente: subjetiva (los ciudadanos pueden exigirlos ante los Tribunales) y objetiva (esos derechos fundamentales como componentes de las normas que integran todo el ordenamiento jurídico vinculan a los poderes públicos). Por tanto, surgen como el derecho que tiene cada particular frente a los poderes públicos.

Nos encontramos con que la nacionalidad no está recogida y regulada como derecho fundamental en la Sección I del Capítulo II del Título I de la CE (lugar donde están los derechos fundamentales y las libertades públicas). Por tanto, en un primer momento se puede pensar que no se trata de un derecho fundamental, pero si atendemos a lo que establece el art. 15 de la DUDH en cuanto al reconocimiento que hace del derecho que tiene toda persona a poseer una nacionalidad y a no ser privada de ella arbitrariamente<sup>14</sup>, parece que sí se trata de un derecho fundamental.

Hay opiniones contrapuestas al respecto. Autores que consideran la nacionalidad como un derecho fundamental y otros, por el contrario, no. Así, por ejemplo, Javier

---

<sup>12</sup> SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, ÁNGEL, *La adquisición de la nacionalidad: los ordenamientos jurídicos español y portugués*, *Revista Jurídica del Notariado*. Números 97-98. Enero-junio 2016, pp 39 y 40.

<sup>13</sup> En palabras de la profesora María Amelia Pascual Medrano, profesora de la Universidad de La Rioja. Tema 1, asignatura Derechos Fundamentales y Derechos Humanos.

<sup>14</sup> Art. 15 DUDH “1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad; 2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad”.



Carrascosa González<sup>15</sup> considera que no se trata de un derecho fundamental por varias razones. La primera es que el art. 81.1 de la CE<sup>16</sup> establece que un derecho fundamental debe ser objeto de desarrollo mediante LO y la nacionalidad es una materia que no precisa de ella, sino que basta una Ley Ordinaria para su desarrollo. Además, sostiene que *“cada Estado regula como estime conveniente la nacionalidad de su población, por lo que el carácter de “derecho fundamental” depende de cada ordenamiento”*<sup>17</sup>. Es decir, para él se trata de un “estado civil” compuesto por derechos y deberes, no un derecho fundamental.

Por el contrario, Guillermo Palao Moreno<sup>18</sup> entiende que la nacionalidad sí es un derecho fundamental al interpretar el citado art. 15 de la DUDH. Considera que el hecho de no privar a nadie arbitrariamente de su nacionalidad teniendo derecho a una, es considerado un derecho fundamental de la persona, un derecho que toda persona va a poder exigir para no quedar desamparada y en situación de apatridia.

Por último, Ángel Sánchez Hernández considera que *“la nacionalidad española no es un derecho fundamental de la persona en el sentido empleado por la CE”*<sup>19</sup>.

En mi opinión no se trata de un derecho fundamental, porque, además de los razonamientos que alegan al respecto los autores citados, nos encontramos ante una materia que no entra en los supuestos previstos en el art. 53.2 de la CE<sup>20</sup>. La nacionalidad es una materia no recogida como derecho fundamental en la CE y, por tanto, no cabe acudir al recurso de amparo ante el TC en caso de vulneración del derecho a la nacionalidad.

---

<sup>15</sup> CARRASCOSA GONZÁLEZ, JAVIER, *Derecho español de la nacionalidad. Estudio práctico*, Comares, Granada, 2011, pp 7,8 y 9.

<sup>16</sup> Art. 81.1 CE *“Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución”*.

<sup>17</sup> CARRASCOSA GONZÁLEZ, JAVIER, *Derecho español de la nacionalidad. Estudio práctico*, Comares, Granada, 2011, p. 8.

<sup>18</sup> PALAO MORENO, GUILLERMO, *La nacionalidad y el derecho de la nacionalidad en un mundo integrado*, en “Nacionalidad y Extranjería”, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2006, pp 25 y 26.

<sup>19</sup> SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, ÁNGEL, *La adquisición de la nacionalidad: los ordenamientos jurídicos español y portugués*, *Revista Jurídica del Notariado*. Números 97-98. Enero-junio 2016, p.18.

<sup>20</sup> Art. 53.2 CE *“Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30”*.

## **2.5 – La nacionalidad como materia indisponible.**

La materia de la nacionalidad resulta indisponible, los destinatarios de las normas referidas a la adquisición, la pérdida, la conservación, etc. de la nacionalidad, no van a poder realizar actos a su libre voluntad en cuanto a la adquisición de la misma. Por tanto, los interesados, como regla general, no pueden ejercer la autonomía de la voluntad en relación a la materia de la nacionalidad (art. 6.2 del CC<sup>21</sup>). Así, la nacionalidad no es objeto de contrato porque, entre otras cosas, podría perjudicar a terceros.

Así mismo, no cabe arbitraje, pues habrá que estar a lo que dispone la CE, los Tratados Internacionales y el CC. Tampoco cabe transacción. La nacionalidad española es una materia que está regulada con sus requisitos, sus vías previstas para la adquisición de la misma sin poder disponer los interesados de manera autónoma de otras vías distintas de las previstas en las normas. En materia de nacionalidad, no se puede, por ejemplo, realizar un contrato como el de arrendamiento, donde las partes sí que pueden disponer del período contractual pactado, de la renta en cuestión por el objeto arrendado, de las facultades de rescisión del contrato, etc.

Además de que la nacionalidad sea una materia indisponible, tampoco está sujeta a prescripción extintiva, es decir, no se pierde al no ejercitarla por el mero transcurso del tiempo.

## **2.6 – Registro Civil y prueba de la nacionalidad.**

Según la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, éste se concibe como un registro público, dependiente del Ministerio de Justicia y cuyos asuntos se encomiendan a la Dirección General de los Registros y del Notariado, teniendo por objeto “*hacer constar oficialmente los hechos y actos que se refieren al estado civil de las personas y aquellos otros que determine la presente Ley*”, (art. 2.2 de la susodicha Ley).

Además, en lo referente a la nacionalidad, el citado texto legal regula los siguientes aspectos, entre otros: en su art. 4, se recoge como inscribible la nacionalidad

---

<sup>21</sup> Art. 6.2 CC “*La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos sólo serán válidas cuando no contrarién el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros*”.

y la vecindad civil; en los arts. 68 y 69 se regulan la inscripción de la nacionalidad y de la vecindad y la presunción de nacionalidad española; el art. 92 establece que, previo procedimiento registral, la nacionalidad puede ser declarada con valor de simple presunción, si no consta en el Registro Civil.

Por otra parte, existen normas en materia de nacionalidad que también regulan algunos aspectos relacionados con el Registro Civil<sup>22</sup>.

Respecto a la prueba de la nacionalidad española, se puede verificar que se está en posesión de la misma mediante la prueba extrajudicial o la prueba judicial. La primera, se trata de casos en los que existe una inscripción obligatoria en el Registro Civil. Dicha prueba se realiza a través del certificado de nacionalidad, siendo el Encargado del Registro Civil quien lo realice (lo deberá hacer de manera obligatoria si

---

<sup>22</sup> Entre otras, cabe citar la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España *“Para las inscripciones que deban practicarse en el Registro Civil como consecuencia de la concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza a los sefardíes de origen español que acrediten especial vinculación con España, conforme a lo dispuesto en la presente Ley, será competente e encargado del Registro Civil que lo fuera para la inscripción del nacimiento”*; el art. 2 del Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, sobre opción de la nacionalidad española por parte de los naturales del Sahara *“Los que pretendan acogerse a lo previsto en el artículo anterior deberán manifestarlo así en el plazo máximo de un año, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, mediante comparecencia ante el Juez encargado del Registro Civil del lugar de su residencia o el Cónsul español de la demarcación correspondiente, aportando la documentación española de que se hallen provistos y expresado su voluntad de optar por la nacionalidad española”*; el art. 1 del Decreto 1347/1969, de 26 de junio, por el que se reglamenta la opción de nacionalidad prevista en el Tratado sobre retrocesión del territorio de Ifni *“El interesado que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 3 del Tratado sobre retrocesión del territorio de Ifni, quiera optar por la nacionalidad española, formulará la correspondiente declaración ante el encargado del Registro Civil de su domicilio y acreditará ante él que concurren los requisitos exigidos en dicho artículo”*; art. 3 del Real Decreto 2987/1977, de 22 de octubre, sobre concesión de la nacionalidad española a determinados guineanos *“El encargado del Registro ante quien se formule la declaración, levantará acta por duplicado y recibirá aquellas pruebas que justifiquen, en la medida de lo posible, la existencia de las circunstancias mencionadas”*; el art. 9.1 del Real Decreto 453/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, establece que corresponde a la Dirección General de los Registros y del Notariado, entre otras atribuciones *“la elaboración de los proyectos legislativos sobre las materias de nacionalidad, estado civil y ordenación y funcionamiento del Registro Civil en coordinación con la Secretaría General Técnica, y el conocimiento e informe de cuantos proyectos normativos puedan afectar a dichas materias; La tramitación y, en su caso, resolución de los expedientes de nacionalidad y de los de reconocimiento o denegación de las situaciones que afectan al estado civil de los ciudadanos y su inscripción en el Registro Civil (...)”*; Respecto a las actuaciones registrales en materia de nacionalidad, cabe señalar lo siguiente: *“en virtud de expediente gubernativo puede declararse con valor de simple presunción: 2º la nacionalidad, vecindad o cualquier estado, si no consta en el Registro”* según el art. 96.2 de la Ley 8 de junio de 1957, del Registro Civil (vigente hasta el 30 de junio de 2017). Y según el art. 97.4 de la misma Ley, *“En última instancia, cabe apelación contra las resoluciones ante la Dirección General”* (de los Registros y del Notariado). A través de este recurso de apelación, los ciudadanos pueden recurrir las decisiones, no de trámite, de los órganos del Registro Civil y dichos actos serán revisados por la Dirección General de los Registros y del Notariado, que depende del Ministerio de Justicia y que tiene encomendados todos los asuntos referentes al Registro Civil siempre y cuando dichos actos supongan la inadmisión de un escrito inicial o pongan término al expediente.

el interesado lo solicita). Respecto a la prueba judicial, se obtiene a través de un juicio civil ordinario (art. 249.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil) para determinar la nacionalidad del sujeto, pero esta vía no es muy utilizada. Como anteriormente se ha señalado, a pesar de que reglamentariamente se establece que el DNI tiene valor probatorio, por sí solo, para acreditar la nacionalidad española de su titular, esa validez en relación con la prueba de la nacionalidad hay que ponerla en duda porque vulnera el principio de exclusividad de prueba establecido en los arts. 2, 68 y 69 de la LRC respecto de las materias propias de su objeto. Por tanto, hemos de cuestionar el valor probatorio del DNI para acreditar la nacionalidad española por infringir el principio de legalidad y jerarquía consagrado en el art. 9.3 de la CE

### **3. FUENTES DEL DERECHO ESPAÑOL DE LA NACIONALIDAD.**

Son diversas las fuentes que regulan la materia de la nacionalidad. Así, nos encontramos con la Constitución Española, Tratados Internacionales (Convenios multilaterales y Convenios bilaterales), el Código Civil, la Ley del Registro Civil, el Reglamento del Registro Civil y con la labor que realiza la Dirección General de los Registros y del Notariado mediante resoluciones.

#### ***3.1 – Constitución Española.***

El art. 149.1.2<sup>a23</sup> de la CE establece que el Estado es el competente exclusivo en la regulación de la nacionalidad, quedando las CCAA sin poder elaborar normas referentes a la misma, por tratarse de una competencia exclusiva de Estado. Además, en su art. 11 se establecen previsiones con referencia a la nacionalidad, estableciendo que será una Ley quien fije la adquisición, pérdida y otros aspectos. La CE no regula el régimen jurídico de la nacionalidad, será la Ley quien lo haga. Ello es así para que, en caso de modificar disposiciones legales, no haya que recurrir a la modificación de la CE sino de la Ley que se trate.

Además, la CE no establece las distintas posibles vías de adquisición de la nacionalidad española, ni establece otros conceptos como: qué se entiende por español de origen o español no originario, pues para ello habrá que recurrir a los textos legales

---

<sup>23</sup> Art. 149.1.2<sup>a</sup> CE “El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo”.

donde se establecen los requisitos, las condiciones, los límites, etc. para adquirir la nacionalidad española. Por tanto, en conclusión, la CE deja constancia de la materia de la nacionalidad como una de las competencias que tiene el Estado dejando a la Ley su regulación.

### **3.2 – Código Civil.**

En los arts. 17 a 26 es donde se encuentra regulada la materia, recogándose quiénes son españoles de origen, qué requisitos deben cumplirse para la consolidación de la nacionalidad española, el régimen que se aplica a las personas extranjeras que han sido adoptadas respecto a la adquisición de la nacionalidad española, quiénes tienen derecho a optar por la nacionalidad española y cómo se formulará dicha opción, la carta de naturaleza, y otros aspectos que se comentarán con más detenimiento.

Dichos preceptos quedan complementados con la legislación registral que regula el modo de acceder de la nacionalidad española al Registro Civil.

## **4. LA ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA.**

En primer lugar, es preciso distinguir entre españoles de origen y españoles no originarios. Se consideran españoles de origen las personas que adquieren tal condición de manera automática, bien sea mediante el criterio del *ius sanguinis* o del *ius soli*, (arts. 17.1.a), b), c), d) y art. 19.1 del CC), y de manera no automática, por opción (art. 20.1.c) del CC que remite a los arts. 17.2 y 19.2 del CC y los hijos y nietos de padres originariamente españoles según la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura). En segundo lugar, se consideran españoles no originarios las personas que adquieren la nacionalidad española de manera no automática, es decir, en un momento posterior a su nacimiento (puede ser mediante el derecho de opción (art. 20.1.a) y 20.1.b) del CC; por naturalización que comprende la carta de naturaleza (art. 21.1 del CC) y la residencia (art.21.2 del CC) o por posesión de Estado (art. 18 del CC)).

El art. 11 de la CE<sup>24</sup> muestra esa distinción existente entre los españoles originarios y los españoles no originarios al establecer que de acuerdo a las Leyes se adquirirá, conservará y perderá la nacionalidad española, así como se podrá optar a ella aun teniendo otra nacionalidad, es decir, casos de doble nacionalidad. La adquisición de un tipo u otro de nacionalidad (de origen o no originaria) dependerá de la vía por la cual se obtenga la nacionalidad española.

#### ***4.1 – La nacionalidad española de origen.***

La mayor parte de la población española adquiere la condición de español en el momento de su nacimiento según el criterio del *ius sanguinis* que establece que “son españoles los hijos de españoles, independientemente del lugar donde se hubiere producido dicho nacimiento”<sup>25</sup>, teniendo en cuenta que este último criterio prevalece en Estados que tienen mucha emigración (con el objetivo de que sigan los emigrantes vinculados a su Estado de origen, es decir, que no pierdan la nacionalidad española los hijos de españoles independientemente de su lugar de nacimiento).

Con todo ello, pasamos a ver la forma de adquirir la nacionalidad española de origen. Por “españoles de origen” se entienden aquellos que adquieren la nacionalidad española de forma automática (arts. 17.1<sup>a</sup>.a), b), c), d) y art. 19.1 del CC) o por opción (art. 20.1.c) del CC que se remite al art. 17.2 y al art. 19.2 del CC) y los hijos y nietos de padres originariamente españoles según la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

##### **4. 1. 1 Nacionalidad española de origen automática:**

###### **a) - Criterio del *ius sanguinis*:**

*“Parte de la idea de que la pertenencia de una persona a una familia permite la integración de los descendientes en el Estado de los ascendientes en el que la familia*

---

<sup>24</sup> Art. 11 CE “1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. 2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. 3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen”.

<sup>25</sup> CARRASCOSA GONZÁLEZ, JAVIER, *Derecho español de la nacionalidad. Estudio práctico*, Comares, Granada, 2011, p. 48.

*está insertada*”<sup>26</sup>. Su primer reflejo queda recogido en el art. 17.1.a) del CC, la filiación natural, pues “*Son españoles de origen: los nacidos de padre o madre españoles*”, los cuales deben ser españoles en el momento del nacimiento del hijo, no posteriormente, independientemente de que ostenten simultáneamente otra nacionalidad. Dicha nacionalidad del progenitor tiene que quedar probada, de lo contrario no entra en juego este artículo del CC y el nacido no será español. Si el progenitor perdió la nacionalidad española también debe probarse tal pérdida y, por tanto, no se aplicará el criterio del *ius sanguinis*.

“*Para considerar “nacido” de español a una persona es necesario que se den indicios de su generación física por progenitor español, por ejemplo: inscripción en el Registro Civil*”<sup>27</sup>. La condición de nacional español se adquiere cuando se produce el nacimiento de la persona dentro de las fronteras españolas o fuera y sea la filiación matrimonial o no matrimonial, es decir, mediante la sangre, de los padres a sus hijos biológicos.

Antes de la entrada en vigor de la CE se establecía el principio de unidad jurídica de la familia y de dependencia familiar atribuyendo la nacionalidad *ius sanguinis a patre*, por lo que si el padre perdía tal condición, los hijos también. Como hoy en día ese criterio sería discriminatorio e inconstitucional, se aprobó la Ley 51/1982, de 13 de julio, de modificación de los artículos 17 a 26 del CC.

Si se atiende al principio de igualdad que consagra el artículo 14 de la CE<sup>28</sup>, no puede existir preferencia de un sexo respecto de otro para atribuir la nacionalidad española, así como el hecho del carácter matrimonial o no matrimonial de la filiación, teniendo solamente en cuenta en ambos casos que uno de los progenitores sea español.

En segundo lugar, el criterio del *ius sanguinis* se plasma en el art. 19.1 del CC, el menor de dieciocho años adoptado por español, estableciendo que “*El extranjero menor de dieciocho años adoptado por un español adquiere, desde la adopción, la nacionalidad española de origen*”, aunque el adoptante siendo español no lo sea de origen, el adoptado sí será español de origen pero no desde el momento de su nacimiento sino desde la adopción. En este supuesto, al igual que en el de la filiación

---

<sup>26</sup> SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, ÁNGEL, *La adquisición de la nacionalidad: los ordenamientos jurídicos español y portugués*, Revista Jurídica del Notariado. Números 97-98. Enero-junio 2016, p.26.

<sup>27</sup> CARRASCOSA GONZÁLEZ, JAVIER, *Derecho español de la nacionalidad. Estudio práctico*, Comares, Granada, 2011, p. 52.

<sup>28</sup> Art. 14 CE “*Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social*”.

biológica, hay igualdad en cuanto a que no se distingue el sexo del adoptante. La adopción permite la adquisición de la nacionalidad española de origen al extranjero menor de dieciocho años ya sea adoptado por un español o española.

Mientras la adquisición de la nacionalidad española de origen en el caso del art. 17.1.a) del CC (filiación biológica) se produce en el momento del nacimiento, en el caso de la adopción (art. 19.1 del CC) la adquisición de la nacionalidad española de origen se adquiere desde el momento de la adopción, por tanto, ésta no tiene efectos retroactivos al momento del nacimiento. Los requisitos que deben darse para que se adquiriera la nacionalidad española de origen en el caso del art. 19.1 del CC son:

El adoptado tiene que tener menos de dieciocho años.

El adoptante ha de ser español cuando se produzca la adopción.

La adopción tiene que reunir los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico español, ya que en muchos países esta figura no tiene el significado que tiene en España, al no generar vínculos de filiación. El art. 19.1 CC se refiere a una “adopción plena”, pues otro tipo de adopciones “menos plenas” o “simples” no responden a los requisitos establecidos para la adopción en el derecho español. Para que se considere la adopción válida tienen que concurrir los requisitos que establece la LAI en sus arts. 10 a 13 (respecto a la idoneidad de los adoptantes, las obligaciones preadoptivas y postadoptivas de los adoptantes, los derechos a conocer los orígenes biológicos y la protección de datos de carácter personal).

#### b) - Criterio del *ius soli*:

Presenta distintos objetivos como son: evitar que un menor quede sin nacionalidad cuando no puede adquirirla vía *ius sanguinis* (art. 7.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño)<sup>29</sup>, evitar casos de personas que no tienen nacionalidad, es decir, los apátridas, y evitar que haya linajes extranjeros en España de manera diferenciada. Este criterio se presenta en el art. 17.1. b), c) y d) del CC, atribuyéndose la nacionalidad de origen de acuerdo al nacimiento en “territorio nacional español”, por lo que es conveniente tener claro qué comprende dicho “territorio nacional español”.

Por “territorio nacional español” se entiende el lugar donde España ejerce su soberanía, es decir, comprende el espacio español en la Península Ibérica, Baleares,

---

<sup>29</sup> Art. 7.1. Convención sobre los Derechos del Niño “El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos”.



Canarias, Ceuta y Melilla, la Isla de Alborán, el Peñón de Alhucemas, el Peñón de Vélez de la Gomera, la Isla del Perejil, las Islas Chafarinas, el enclave de Llívia, la Isla de los Faisanes y el Istmo de Gibraltar, así como el mar territorial que rodea Gibraltar.

El art. 17.1.b) del CC establece que adquieren la nacionalidad española de origen *“Los nacidos en España de padres extranjeros si, al menos, uno de ellos hubiera nacido también en España. Se exceptúan los hijos de funcionario diplomático o consular acreditado en España”*. El nacimiento ha de producirse en España y uno de los progenitores tuvo que haber nacido también en España para así facilitar la integración de la tercera generación de extranjeros nacidos en España y acabar con la nacionalidad extranjera de las personas que están arraigadas en España pero con otra nacionalidad<sup>30</sup>.

Un segundo caso es el contemplado en el art. 17.1.c) del CC que establece que son españoles de origen *“Los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad”*, atribución por el mero hecho de nacer en España y para evitar la apatridia de quien ha nacido en España. Se trata de casos donde los progenitores son apátridas, ya que éstos no pueden transmitirle ninguna nacionalidad al nacido, y casos donde la Ley personal de dichos progenitores no permite atribuir la nacionalidad al nacido (por ejemplo: si al nacer el hijo en España, las leyes personales de los padres están basadas en el criterio del *ius soli*).

Las distintas categorías que engloban dicho art. son:

Los hijos que nacen en España de padres que no tienen nacionalidad: dicha carencia de nacionalidad (apatridia) debe ser probada. Además, el hecho de que los padres del nacido ostentan la condición de “refugiado” o “asilado”, no comporta que el hijo adquiera la condición de “hijo de apátrida”.

Los hijos que nacen en España de padres extranjeros que tienen la nacionalidad del país donde han nacido y la ley de dicho país no atribuye la nacionalidad al hijo.

El art. 17.1.c) del CC no se aplica al nacido en España si la Ley nacional de los padres le atribuyen la nacionalidad de cualquiera de ellos.

Ejemplo en el que un sujeto desea adquirir la nacionalidad española por considerar que sus padres extranjeros no pueden atribuirle la suya de manera

---

<sup>30</sup> PALAO MORENO, GUILLERMO, *La nacionalidad y el derecho de la nacionalidad en un mundo integrado*, en “Nacionalidad y Extranjería”, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2006, p. 44.

automática: sentencia de la AP<sup>31</sup> que deniega la adquisición de la nacionalidad española a un sujeto que alega que sus padres son extranjeros (padre peruano y madre estadounidense) y ninguno puede transmitirle su nacionalidad de manera automática, es decir, reclama una nacionalidad por considerarse apátrida. La AP desestima el recurso que interpone al comprobar que, el sujeto, estuvo en posesión de la nacionalidad de la madre al ostentar ésta un pasaporte como ciudadana de los Estados Unidos de América.

El art. 17.1.d) del CC, contempla el supuesto de la filiación indeterminada. Establece que adquirirán la nacionalidad española *“Los nacidos en España cuya filiación no resulte determinada. A estos efectos, se presumen nacidos en territorio español los menores de edad cuyo primer lugar conocido de estancia sea territorio español”*. Por tanto, este artículo no se aplica al hijo que le corresponde una nacionalidad extranjera *ius sanguinis*, sino únicamente se aplicará cuando la filiación no pueda determinarse.

Son, por tanto, españoles de origen de manera automática los nacidos en España cuya filiación no resulte determinada. Se presumen nacidos en territorio español los menores de edad cuyo primer lugar conocido de estancia sea territorio español, ya que se desconoce otro posible lugar de nacimiento. No obstante, *“si se desconoce el lugar de nacimiento del menor, puede ser conocida la filiación del mismo aun cuando no esté inscrita, siendo en dicho caso inaplicable el art. 17.1.d) del CC”*<sup>32</sup>.

#### 4. 1. 2 Nacionalidad española de origen por opción:

La vía llamada *“opción”* es un mecanismo que favorece a ciertos extranjeros que tienen un arraigo notable con España y para el que es necesario una declaración de voluntad unilateral por parte del extranjero interesado siempre que se encuentre en condiciones de optar a ello, pues la atribución directa por ley no existe en este caso. Se encuentra recogido en los arts. 17.2, 19.2 del CC, a los que remite el art. 20.1.c) del CC, así como lo dispuesto en la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

---

<sup>31</sup> Sentencia AP de Madrid, num. 285/2012, de 21 de mayo.

<sup>32</sup> CARRASCOSA GONZÁLEZ, JAVIER, *Derecho español de la nacionalidad. Estudio práctico*. Comares, Granada, 2011, p. 96.

Se trata de una vía de adquisición para los casos que prevé la Ley y dentro de los plazos que ésta marca porque nos encontramos ante un derecho subjetivo y no una autorización que concede la Administración de manera discrecional, pues el interesado puede ejercitar o no dicha vía. Además, no se puede ejercitar si el interesado es español, pero no de origen, y quiere adquirir la nacionalidad de origen.

La declaración de opción se realizará ante el Encargado del Registro Civil o el Cónsul correspondiente al domicilio del interesado (que procederá a la inscripción marginal a la del nacimiento), o ante el Encargado del Registro Civil donde conste el nacimiento.

Los supuestos recogidos que pueden optar a obtener la nacionalidad española de origen por opción son los siguientes:

Art. 17.2 del CC: *“La filiación o el nacimiento en España, cuya determinación se produzca después de los dieciocho años de edad, no son por sí solos causa de adquisición de la nacionalidad española. El interesado tiene entonces derecho a optar por la nacionalidad española de origen en el plazo de dos años a contar desde aquella determinación”*. Por tanto, si el interesado ha superado los dieciocho años de edad podrá solicitar la nacionalidad si lo desea (teniendo en cuenta que tenga una cierta especial vinculación con España) y teniendo claro que dicho acto es voluntario, es decir, no es obligatorio para el interesado. Si el descubrimiento de la filiación o el nacimiento en España es anterior a los dieciocho años, la nacionalidad se adquirirá según lo dispuesto en el art. 17.1.a) y b) del CC). Este artículo es aplicable cuando el interesado cree que es hijo de extranjeros o cree que ha nacido en el extranjero y, pasados dieciocho años, se descubre que *“en realidad es hijo de un progenitor español o que ha nacido en España en condiciones bastantes para ser español conforme al artículo 17.1 del CC”*<sup>33</sup>. Por tanto, la adquisición de la nacionalidad se producirá desde el momento en que el interesado ejercite la opción, no desde el nacimiento.

Art. 19.2 del CC establece que *“Si el adoptado es mayor de dieciocho años, podrá optar por la nacionalidad española de origen en el plazo de dos años a partir de la constitución de la adopción”*. Por tanto, la adquisición de la nacionalidad española acontece con la adopción. Una vez que ha transcurrido dicho plazo, para optar por la nacionalidad española, caduca el derecho a adquirir la nacionalidad por esta vía.

---

<sup>33</sup> ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, AURELIA, *Nacionalidad Española. Normativa vigente e interpretación jurisprudencial*, Aranzadi, Navarra, 2008, p. 80.

Por otra parte, hemos de referirnos a la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura (conocida como Ley de Memoria histórica) que introduce dos supuestos de opción, y su consiguiente adquisición originaria de la nacionalidad española, al establecer lo siguiente: *“1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente Disposición adicional. Dicho plazo podrá ser prorrogado por acuerdo de Consejo de Ministros hasta el límite de un año. 2. Este derecho también se reconocerá a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”*.

Dicha petición podrá tener cabida a partir del 27 de diciembre de 2008 hasta el 27 de diciembre de 2010, adquiriendo el solicitante la nacionalidad española de origen, es decir, es un supuesto de opción “transitorio”. Este art. no establece el procedimiento que se debe seguir, por lo que acudiremos a los arts. 20 y 23 del CC.

Analizando ambos apartados de la disposición se deduce lo siguiente: respecto al primer apartado, se trata de un interesado que puede no haber nacido en España, así como sus padres de los cuales va a obtener dicho beneficio, y dicho interesado deberá tener la cualidad de “hijo” en función del país del que es nacional; en cuanto al segundo apartado, será suficiente acreditar una partida de nacimiento del abuelo o de la abuela, siendo más difícil demostrar que perdió la nacionalidad española por el exilio. En ambos casos, se podía solicitar la certificación de nacimiento del solicitante, de sus padres o de sus abuelos, mediante un escrito dirigido al encargado del Registro Civil y en los casos de Registros informatizados, por vía telemática a través de la web del Ministerio de Justicia<sup>34</sup>.

#### **4.2 –La nacionalidad española no originaria.**

Una vez visto quiénes son considerados españoles de origen y los modos previstos para la adquisición de dicha condición, pasamos a ver la nacionalidad

---

<sup>34</sup> CAZORLA GONZÁLEZ, MARÍA JOSÉ, *La adquisición de la nacionalidad española por descendientes de españoles. Pasado, presente y futuro*, en “Manual Básico de Derecho y ciudadanía española en el exterior” (Director PÉREZ GÁLVEZ, JUAN FRANCISCO), Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2008, p. 30.

española no originaria. Este grupo se divide en: los españoles que adquieren la nacionalidad mediante derecho de opción (art. 20.1.a) y b) del CC), por naturalización (mediante carta de naturaleza (art. 21.1. del CC) o residencia (art. 21.2 del CC)) y por posesión de Estado (art. 18 del CC).

Se trata de personas que adquieren la nacionalidad española pero no de manera automática, sino posteriormente, es decir, de manera derivativa. Se requiere la intervención del interesado que tiene que cumplir una serie de requisitos para que la nacionalidad le sea otorgada por el cauce que ha elegido.

#### 4.2.1 Opción:

El art. 20 del CC, en el apartado 1 establece las personas que tienen derecho a adquirir la nacionalidad española por esta vía, siendo *“a) Las personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español. b) Aquellas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”*.

Las personas a las que se refiere el apartado a) son hijos de padres extranjeros que han adquirido después la nacionalidad española con independencia de que en el momento de ejercer la opción el hijo ya no esté sometido a la patria potestad, o con independencia de que el padre o la madre hayan dejado de ser españoles. Lo importante es que lo fueran cuando el hijo estuvo sometido a la patria potestad. Si el padre o la madre ha adquirido o recuperado la nacionalidad tras la extinción de la patria potestad, el derecho a optar por la nacionalidad española no tiene lugar, pues se trata de un caso donde el interesado nunca ha estado sujeto a dicha patria potestad de un español.

El apartado b) de dicho artículo favorece, independientemente de la edad y sin un plazo fijado, a las personas que han nacido de emigrantes españoles que nacieron en España pero que al emigrar perdieron la nacionalidad, aunque para ello la cualidad de estas personas, debe quedar acreditada. Debe tratarse de hijos de personas en las que concurran a la vez ser español de origen y nacido en España. Aunque el interesado puede realizar dicha declaración en España no se le exige residir aquí, por lo que si vive en el extranjero podrá hacer la declaración desde allí.

#### 4.2.2 Nacionalidad española no originaria por naturalización.

##### a) – Carta de naturaleza:

En primer lugar, el art. 21.1 del CC, la naturalización por carta de naturaleza, establece que *“La nacionalidad española se adquiere por carta de naturaleza, otorgada*

*discrecionalmente mediante Real Decreto, cuando en el interesado concurren circunstancias excepcionales*". Dicha posibilidad soberana y discrecional se realiza por parte del Gobierno, por el Consejo de Ministros, mediante Real Decreto y puede suponer un privilegio para el interesado, aunque si atendemos al tenor literal del artículo 366 del RRC<sup>35</sup>, supone una "gracia". La concesión de la nacionalidad española presenta una relación respecto a la vecindad civil (según establece el art. 15.2 del CC), ya que el interesado al obtener la condición de español va a ostentar la vecindad civil que el Real Decreto determine.

En la práctica, dicha carta de naturaleza se ha venido otorgando en casos donde: el sujeto tiene un vínculo fuerte con España. Se trata de personas "premiadas" por haber conseguido méritos de distinta naturaleza. También se ha otorgado por "*haber prestado servicios al Estado en el ámbito militar, cultural, económico, político, deportivo, etc*"<sup>36</sup>. Dicha vía de adquisición de la nacionalidad española no originaria puede ser utilizada por los extranjeros casados con españoles que trabajan fuera de España y que han sido contratados por España pero que no pueden adquirir la nacionalidad por residencia porque no viven aquí. Además, hay que tener en cuenta que, para conceder la nacionalidad por esta vía, no es preciso que el interesado tenga residencia en España, aunque sí una cierta relación estrecha con el país sin un grado concreto de integración<sup>37</sup>.

Las características de la carta de naturaleza son: no se trata de un derecho subjetivo, el Gobierno lo otorga de manera discrecional, se requiere una declaración por parte del sujeto, se requiere el requisito de concurrencia de circunstancias excepcionales y será el Consejo de Ministros quien evalúe si éstas se dan.

Pero, con todo ello, ¿qué entendemos por "circunstancias excepcionales"? ¿a qué se refiere el legislador con dicha terminología? Se trata de un término indeterminado, pues no tiene un significado concreto ni se refiere a una situación en particular. Con esta terminología, "*la Administración puede considerar cualquier*

---

<sup>35</sup> Art. 366 RRC "*Cuando la concesión sea otorgable discrecionalmente o cuando dependa de circunstancias excepcionales o de motivos de orden público o interés nacional, los Encargados instructores y el Subdirector en sus propuestas se limitarán a enjuiciar los requisitos de fondo y forma, y a destacar los hechos probados o notorios que puedan ilustrar para la decisión*".

<sup>36</sup> VIÑAS FARRÉ, RAMÓN "*Evolución del derecho de nacionalidad en España: continuidad y cambios más importantes*", Trabajo de Fin de Grado, Universidad de Barcelona.

<sup>37</sup> CARRASCOSA GONZÁLEZ, JAVIER, *Derecho español de la nacionalidad. Estudio práctico*. Comares, Granada, 2011, p. 201.

*motivo como “suficiente” para otorgar la carta de naturaleza”*<sup>38</sup>, lo que no puede llegar a ser un abuso del poder político al tratarse de un concepto indeterminado.

El Gobierno ha concretado dos “razones excepcionales” con las que la institución en cuestión se otorga:

El Real Decreto 39/1996, de 19 de enero, sobre concesión de la nacionalidad española a los combatientes de las Brigadas Internacionales en la guerra civil española, se refiere a dichos combatientes durante la guerra civil española de 1936 a 1939 teniendo que renunciar a la anterior nacionalidad (art. 23 b) del CC), renuncia que ha de formalizarse ante el funcionario competente en cuestión en un plazo de ciento ochenta días después a que se notifique la concesión de la nacionalidad, pues pasado ese tiempo la concesión caduca y no puede revivir en el futuro (arts. 220 y 348 del RRC). La Ley 52/2007, conocida como Ley de Memoria Histórica, eliminó este requisito de renuncia y no estableció un límite de plazo para la solicitud, pero aun así no fueron muchos los solicitantes. Además, el Real Decreto 39/1996, de 19 de enero, sobre concesión de la nacionalidad española a los combatientes de las Brigadas Internacionales en la guerra civil española, fue sustituido por el posterior Real Decreto 1792/2008, de 3 de noviembre, sobre concesión de la nacionalidad española a los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales.

El Real Decreto 453/2004, de 18 de marzo, sobre concesión de la nacionalidad española a las víctimas de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004, establece en su Exposición de Motivos que se concederá la nacionalidad española por el hecho de haber sido víctima, o familiar de dicha víctima fallecida, en los atentados terroristas de Madrid el 11 de marzo de 2004, entendiéndose por víctima lo que señala el art. 1 de dicho Real Decreto. La presentación de dicha solicitud, como establece el Real Decreto, debía realizarse antes del 11 de septiembre de 2004 pero *“el Consejo de Ministros consideró su utilización para otorgar la nacionalidad por dicha vía a los familiares de los fallecidos como consecuencia del atentado terrorista perpetrado en la T4; a los soldados extranjeros que hayan fallecido por algún atentado terrorista mientras estén al servicio de misiones humanitarias del Estado español y a los fallecidos en el atentado terrorista contra un convoy español el 24 de junio de 2007 en Líbano”*<sup>39</sup>.

---

<sup>38</sup> CARRASCOSA GONZÁLEZ, JAVIER, *Derecho español de la nacionalidad. Estudio práctico*. Comares, Granada, 2011, p. 200.

<sup>39</sup> ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, AURELIA, *Nacionalidad Española. Normativa vigente e interpretación jurisprudencial*, Aranzadi, Navarra, 2008, p. 109.

La formulación de la solicitud la podrán realizar los sujetos mencionados en el art. 21.3 del CC, cumpliendo los trámites y requisitos que señala el art. 23 del CC y dicha tramitación da lugar a un expediente que está regulado por la legislación registral. La concesión de la nacionalidad española por esta vía queda sujeta a la discrecionalidad del Gobierno (puede otorgar o denegar la nacionalidad española) que tendrá que tener en cuenta los artículos 9.3<sup>40</sup> y 106.1<sup>41</sup> de la CE ante la prohibición de la “arbitrariedad de los poderes públicos”, pues si dicha concesión es contraria al interés público se abrirá la vía para poder recurrirla ante los tribunales. Si muestra falta de interés público en su denegación, por causas de nulidad o ilegalidad, el interesado recurrirá a la jurisdicción contencioso – administrativa y será la Sala de lo Contencioso – Administrativo del TS la que resuelva el recurso.

b) – Residencia:

En segundo lugar, la adquisición de la nacionalidad española por residencia es la forma más recurrente de adquisición de la nacionalidad española y en ella concurren tres elementos, a saber, el cumplimiento del requisito objetivo de la residencia legal y continuada del interesado en España durante un cierto tiempo (diez años, cinco años, dos años o un año, según los casos recogidos en el art. 22 del CC); la concesión por parte del Ministerio de Justicia de la posibilidad de adquirir la nacionalidad española; y la declaración de voluntad del interesado, a través de su solicitud, de adquirir la nacionalidad española por residencia. El interesado en adquirir la nacionalidad española por residencia no posee un derecho subjetivo a la misma, es un reconocimiento de un derecho que el Ministerio de Justicia puede denegar por motivos razonados de orden público o interés nacional, aun cuando el solicitante cumpla los requisitos legales exigidos (art. 21.2 del CC<sup>42</sup>). Según el art. 21.3 del CC, *“La solicitud para la concesión de la nacionalidad española por residencia en España, podrá formularla: El interesado emancipado o mayor de dieciocho años; el mayor de catorce años asistido por su representante legal; el representante legal del menor de catorce años; el representante*

---

<sup>40</sup> Art. 9.3 CE *“La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”*.

<sup>41</sup> Art. 106.1 CE: *“Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican”*.

<sup>42</sup> Art. 21.2 CC *“La nacionalidad española también se adquiere por residencia en España, en las condiciones que señala el artículo siguiente y mediante la concesión otorgada por el Ministro de Justicia, que podrá denegarla por motivos razonados de orden público o interés nacional”*.



*legal del incapacitado o el incapacitado, por sí solo o debidamente asistido, según resulte de la sentencia de incapacitación*”. El representante legal sólo podrá formular la solicitud si previamente ha sido autorizado por el encargado del Registro Civil del domicilio del declarante, previo dictamen del Ministerio Fiscal.

Los apartados 1 y 2 del art. 22 del CC establecen la duración de la residencia para la concesión de la nacionalidad:

Duración de la residencia en España por plazo de diez años: se trata del plazo general de residencia en España. A excepción de Portugal, los nacionales de los Estados miembros de la UE no gozan de plazos reducidos de residencia para el acceso a la nacionalidad española. Por otro lado, los apátridas también están sujetos a este plazo de diez años.

Duración de la residencia en España por plazo de cinco años: este plazo se ha establecido para los solicitantes que ostentan la condición de refugiados y para sus descendientes. No cabe encuadrar dentro de este plazo a los sujetos que han obtenido el derecho de asilo, ya que se ha eliminado del Derecho español la figura del asilo. Por ello, el asilado queda equiparado con el refugiado.

Duración de la residencia en España por plazo de dos años: este plazo beneficia a los nacionales de origen de países iberoamericanos, así como de Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal, y a los sefardíes. Entre los países iberoamericanos hay que incluir a Brasil y Puerto Rico. Decir que los solicitantes deberán ser nacionales de origen de dichos países y ostentarán una de esas nacionalidades en el momento de cursar la petición de nacionalidad española por residencia. Se excluyen de este plazo a los nacionales de Gibraltar y los de las antiguas posesiones españolas en Asia y Oceanía, del Sahara Occidental y de Sidi Ifni.

Duración de la residencia en España por plazo de un año: seis son los supuestos enumerados en el art, 22.2 del Código Civil: Primero: *“el que haya nacido en territorio español”*, por territorio español deberá entenderse el territorio nacional español; Segundo: *“el que no haya ejercitado oportunamente la facultad de optar”*; Tercero: *“el que haya estado sujeto legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución españoles durante dos años consecutivos, incluso si continuare en esta situación en el momento de la solicitud”*, teniendo aquí cabida la tutela y curatela ordinarias, la tutela automática de entidades públicas y el acogimiento familiar. Se excluyen la guarda de hecho y el defensor judicial; Cuarto: *“el que al tiempo de la*

*solicitud llevar un año casado con español o española y no estuviere separado legalmente o de hecho*”, en este supuesto, se entiende que el cónyuge que conviva con funcionario diplomático o consular español acreditado en el extranjero, tiene residencia legal en España. Aquí se incluyen a los sujetos del mismo sexo que han contraído matrimonio entre sí en España o en otros países donde está admitido el matrimonio entre personas del mismo sexo; Quinto: *“El viudo o viuda de española o español, si a la muerte del cónyuge no existiera separación legal o de hecho”*, precisándose en este caso una duración determinada del matrimonio; Sexto: *“El nacido fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles”*, este punto favorece a los nietos de los emigrantes y sólo se aplica a los hijos biológicos, excluyendo, así, a los hijos adoptivos.

A modo de ejemplo, en cuanto a la duración de la residencia para la adquisición de la nacionalidad española, puede señalarse una sentencia dictada por la AN<sup>43</sup> en la que, primeramente, se le deniega a el sujeto la adquisición de la nacionalidad española por residencia. En dicha sentencia, la Administración sostiene que *“como la primera habilitación para residir legalmente en España, por el sujeto, fue solicitada el 29 de noviembre de 2001 (la cual dejó de producir sus efectos el 28 de noviembre de 2002), la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la solicitud que consagra el CC, no puede referirse a dicho 29 de noviembre de 2001, fecha que solicita el interesado que se tenga en cuenta, pues queda interrumpida del 28 de noviembre de 2002 al 7 de abril de 2003. Por tanto, el cómputo comienza en la última fecha (en 2002), sin que el 2 de octubre de 2012 (día en que el sujeto solicita la adquisición de la nacionalidad española por residencia) hayan transcurrido los 10 años fijados en el CC”*. Aun así, la AN falla reconociendo el derecho del sujeto a que le sea concedida la nacionalidad española, pues en el período de tiempo que transcurre entre la primera petición de residir en España (en 2001) y la segunda petición (en 2003), el sujeto estuvo trabajando y cotizando a la Seguridad Social.

En cuanto a los requisitos necesarios para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, que han de cumplirse en el momento de la presentación de la solicitud, y no en otro momento posterior, son, a tenor del art. 22.3 del CC:

Residencia legal en España: que el sujeto resida en España es un requisito que se exige siempre y del que no cabe dispensa. La persona que solicita la nacionalidad por

---

<sup>43</sup> Sentencia AN Sala de lo Contencioso – Administrativo, num 611/2016, de 26 de octubre.

residencia, ha de tener en España su centro social de vida, por lo que no será suficiente con tener el domicilio en España, sino que se exige una residencia de hecho en España. Todo el período de residencia en España ha de ser legal, es decir, deberá estar amparada por un permiso o autorización de residencia que haya sido obtenido de acuerdo a la ley de extranjería; por ello, los extranjeros que se encuentran en España sin la documentación en perfecta regla, así como los que se encuentran en España de modo transitorio, no pueden acceder, por el simple hecho de encontrarse físicamente en España, a la nacionalidad española por residencia.

Residencia continuada en España: el art. 22 del CC no establece plazos o límites a la duración de los viajes que el solicitante pueda realizar fuera del territorio nacional y tampoco establece que el solicitante no pueda salir de España durante diez años. Por ello, se entiende que el solicitante puede viajar al extranjero si luego regresa a España, por tener en ella su residencia habitual. Sin embargo, si el solicitante está continuamente entrando y saliendo de España de forma continua y no ocasionalmente, se puede presuponer que no tiene residencia en España. Para que la ausencia física del territorio español del solicitante no interrumpa la continuidad de la residencia en España, tal ausencia debe quedar justificada.

Residencia en España inmediatamente anterior a la petición: para que se de esta circunstancia, no debe transcurrir un amplio período de tiempo entre la residencia en España y la presentación de la solicitud de nacionalidad española por residencia; los diez, cinco, dos o un año, deben haberse cumplido en su totalidad con anterioridad a la solicitud de nacionalidad; y la residencia legal en España comenzará a contarse a partir de la obtención del permiso de residencia y no desde que el solicitante entra en España.

El punto 4 del art. 22 del CC establece que *“El interesado deberá justificar, en el expediente regulado por la legislación del Registro Civil, buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española”*. Estas dos circunstancias se exigen en la adquisición de la nacionalidad española por residencia, ya que el sujeto que la solicita no tiene ningún otro elemento previo de vinculación con la sociedad española.

La buena conducta cívica no se presume nunca, por lo que el interesado deberá probar siempre, y en todos los casos, que posee una buena conducta cívica. Para ello, deberá justificar y probar que su comportamiento es recto y justo y es conforme a las normas de convivencia<sup>44</sup>.

---

<sup>44</sup> La jurisprudencia estima que para la acreditación de una buena conducta cívica *“ha de estarse a una valoración racional y ponderada de todos los antecedentes, referencias y circunstancias que jalonan la*

Suficiente grado de integración en la sociedad española. En el art. 22.4 no queda definido el concepto de suficiente grado de integración en la sociedad española ni tampoco se dan pautas para poder acreditarlo. Son las autoridades españolas las que deben valorar las circunstancias personales del solicitante y emitir un juicio sobre la integración del solicitante en la sociedad española. El art. 6 del Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, aprobado por Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, regula las pruebas relativas al grado de integración en la sociedad española y establece, en su punto 1, que *“Los interesados deberán superar tanto los exámenes para la obtención del diploma de español como lengua extranjera (DELE) como mínimo de nivel A2, como la prueba que acredite el conocimiento de los valores históricos, constitucionales y socioculturales de España (CCSE), derivados de la configuración de España como un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, y del conocimiento y respeto a los principios que conforman la convivencia en la sociedad española”*.

El art. 23 del CC establece los requisitos formales para la validez de la adquisición de la nacionalidad española por residencia, que deben de ser cumplidos por el interesado, una vez que el Ministerio de Justicia accede a la solicitud para adquirir la nacionalidad española. Para ello, el interesado deberá comparecer ante el Registro correspondiente. Dichos requisitos son: “que el mayor de catorce años y capaz de prestar una declaración por sí jure o prometa fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes; que la misma persona declare que renuncia a su anterior nacionalidad. Quedan a salvo de este requisito los naturales de países mencionados en el apartado 1 del art. 24; que la adquisición se inscriba en el Registro Civil español”.

Según el art. 12.1 del Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, *“la eficacia de la resolución de concesión quedará supeditada a que, en el plazo de ciento ochenta días contados a partir del día siguiente a la notificación de la resolución al interesado o a su representante, se realicen ante el Encargado del Registro Civil las manifestaciones a que se refiere el artículo 23 del Código Civil, relativas al juramento o promesa de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las Leyes, la renuncia a la*

---

*vida social del solicitante, y mediante el análisis de su concreta peripecia vital, determinar si reúne la cualidad de buena conducta cívica legalmente impuesta”*.

*nacionalidad anterior, cuando proceda, y la solicitud de las inscripciones correspondientes en el Registro Civil, sin que hasta ese momento haya cometido el interesado actos incompatibles con el requisito de la buena conducta cívica”.*

A tenor del art. 13.1 del citado Reglamento, en el plazo de cinco días desde que se hayan producido las manifestaciones a que se refiere el art. 23 del CC, el Encargado del Registro Civil competente por razón del domicilio del interesado en España procederá a la inscripción de la adquisición de la nacionalidad española, con lo cual se pondrá fin al procedimiento.

#### 4.2.3 Posesión de estado:

Otra de las vías que regula el ordenamiento jurídico español para la concesión de la nacionalidad española no originaria es la *“posesión de estado”*. Se trata de una novedad en nuestro sistema que evita la ruptura de vínculos que una persona ha tenido con España durante mucho tiempo permitiéndole consolidar la nacionalidad española, así como evitar cambios bruscos de nacionalidad del sujeto. Puede darse el caso, por ejemplo, de que un individuo haya vivido durante muchos años en España creyendo de buena fe que era español, comportándose como tal y con una inscripción en el Registro Civil. Se encuentra regulado en el art. 18 del CC estableciendo que *“La posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante diez años, con buena fe y basada en un título inscrito en el Registro Civil, es causa de consolidación de la nacionalidad, aunque se anule el título que la originó”*.

La tramitación debe iniciarse con un expediente que tiene valor de simple presunción que dará lugar a que sea examinado y ver si se puede acceder a la nacionalidad española por esta vía, realizándose ante el Juez o el Cónsul encargado del Registro Civil del domicilio del interesado.<sup>45</sup>

Para probar los requisitos que se exigen en esta vía y así poder gozar de la nacionalidad española, el interesado podrá solicitar una declaración judicial de su nacionalidad, aunque en caso de no poder ser así, tendrá abierta la vía del juicio civil ordinario, regulado en el art. 249 de la LEC<sup>46</sup>.

---

<sup>45</sup> ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, AURELIA, *Nacionalidad Española. Normativa vigente e interpretación jurisprudencial*, Aranzadi, Navarra, 2008, p. 103.

<sup>46</sup> Artículo 249. *Ámbito del juicio ordinario. 1. Se decidirán en el juicio ordinario, cualquiera que sea su cuantía: 1.º Las demandas relativas a derechos honoríficos de la persona. 2.º Las que pretendan la tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro derecho fundamental, salvo las que se refieran al derecho de rectificación. En estos*

Mediante lo dispuesto en el art. 18 del CC, quien tenía la nacionalidad española vía *ius sanguinis* o *ius soli* no era en realidad español porque era nulo el título que le atribuía la nacionalidad española no originaria. Ahora bien, no parece de justicia que se le otorgue eficacia retroactiva a la nulidad de dicho título dado que la posesión de estado y la utilización continuada de la nacionalidad española implica una actitud del interesado respecto de la nacionalidad española consistente en que se ha comportado como español y ha ejercido derechos y deberes derivados de la cualidad de español. Por tanto, se ha de entender que el interesado tenía buena fe al ignorar el vicio que afectaba a su título atributivo de la nacionalidad<sup>47</sup>.

#### **4.3 – Requisitos comunes a la opción, a la carta de naturaleza y a la residencia.**

El art. 23 del CC establece los requisitos comunes de tres de las vías de adquisición de la nacionalidad española (opción, carta de naturaleza y residencia) para que ésta tenga validez, estableciendo que “*Son requisitos comunes para la validez de la adquisición de la nacionalidad española por opción, carta de naturaleza o residencia:* a) *Que el mayor de catorce años y capaz para prestar una declaración por sí jure o prometa fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes;* b) *Que la misma persona declare que renuncia a su anterior nacionalidad. Quedan a salvo de este*

---

*procesos, será siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramitación tendrá carácter preferente. 3.º Las demandas sobre impugnación de acuerdos sociales adoptados por Juntas o Asambleas Generales o especiales de socios o de obligacionistas o por órganos colegiados de administración en entidades mercantiles. 4.º Las demandas en materia de competencia desleal, defensa de la competencia, en aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea o de los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que les corresponda en función de la cuantía que se reclame. No obstante, se estará a lo dispuesto en el punto 12 del apartado 1 del artículo 250 de esta Ley cuando se trate del ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios en materia de publicidad. 5.º Las demandas en que se ejerciten acciones relativas a condiciones generales de contratación en los casos previstos en la legislación sobre esta materia, salvo lo dispuesto en el punto 12.º del apartado 1 del artículo 250. 6.º Las que versen sobre cualesquiera asuntos relativos a arrendamientos urbanos o rústicos de bienes inmuebles, salvo que se trate de reclamaciones de rentas o cantidades debidas por el arrendatario o del desahucio por falta de pago o por extinción del plazo de la relación arrendaticia. 7.º Las que ejerciten una acción de retracto de cualquier tipo. 8.º Cuando se ejerciten las acciones que otorga a las Juntas de Propietarios y a éstos la Ley de Propiedad Horizontal, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que corresponda. 2. Se decidirán también en el juicio ordinario las demandas cuya cuantía excedan de seis mil euros y aquéllas cuyo interés económico resulte imposible de calcular, ni siquiera de modo relativo.*

<sup>47</sup> PARRA LUCÁN, MARÍA ÁNGELES, *La vecindad civil*, en “Derecho de la Persona, curso de Derecho Civil (1), Volumen II” (Coordinador DE PABLO CONTRERAS, PEDRO), Edisofer S.L., Madrid, 2016, p. 193.

*requisito los naturales de países mencionados en el apartado 1 del artículo 24 y los sefardíes originarios de España; c) Que la adquisición se inscriba en el Registro Civil español”.*

La solicitud para adquirir la nacionalidad española no originaria por opción y por naturalización (carta de naturaleza (art. 21.1 del CC) y residencia (art. 21.2 del CC) se realizará por el menor de edad emancipado o mayor de dieciocho años, así como por un mayor de catorce años asistido por su representante legal o directamente dicho representante legal. También podrá el representante legal del incapacitado o éste por sí solo o asistido (según establezca la sentencia de incapacitación).<sup>48</sup>

Hay que recordar que la notificación en la vía de la residencia y en la carta de naturaleza se hará al solicitante, quienes deberán cumplir los requisitos previstos en dicho art. 23 del CC en los ciento ochenta días siguientes, plazo en el que si no comparece ante el funcionario competente en cuestión hará que se caduque su derecho a dicha adquisición.

En cuanto a los “sefardíes originarios de España”, mencionados en el apartado b) del art. 23 del CC, cabe decir que se trata de los judíos que vivieron en la Península Ibérica (y los descendientes de éstos), quienes fueron expulsados a partir de 1492 teniendo que asentarse en distintos países de Europa. Durante los últimos años han solicitado la adquisición de la nacionalidad española por carta de naturaleza o residencia ante la Dirección General de los Registros y del Notariado. A los descendientes de aquellos judíos se le otorga el privilegio de poder optar a la adquisición de la nacionalidad española. El Real Decreto 893/2015, de 2 de octubre, por el que se concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a determinados sefardíes originarios de España, establece en su art. 1 la concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza a las personas recogidas en el anexo de dicho Real Decreto y de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1 del CC y en su art. 2 el procedimiento previsto para ello, “concluyendo con una resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, que será título suficiente, en su caso, para la práctica de la correspondiente inscripción en el Registro Civil”<sup>49</sup>.

---

<sup>48</sup> ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, AURELIA, *Nacionalidad Española. Normativa vigente e interpretación jurisprudencial*, Aranzadi, Navarra, 2008, p. 81.

<sup>49</sup> SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, ÁNGEL, *La adquisición de la nacionalidad: los ordenamientos jurídicos español y portugués*, *Revista Jurídica del Notariado*. Números 97-98. Enero-junio 2016, p 101.

En suma, existen dos cauces para que los sefardíes puedan obtener la nacionalidad española: probando su residencia legal en España o por carta de naturaleza.

#### **4.4 – Corporaciones, Fundaciones y Asociaciones.**

En último lugar, están las Corporaciones, Fundaciones y Asociaciones reguladas en el art. 28 del CC, el cual establece que *“Las corporaciones, fundaciones y asociaciones, reconocidas por la ley y domiciliadas en España, gozarán de la nacionalidad española, siempre que tengan el concepto de personas jurídicas con arreglo a las disposiciones del presente Código. Las asociaciones domiciliadas en el extranjero tendrán en España la consideración y los derechos que determinen los tratados o leyes especiales”*, entonces, dichas Corporaciones, Fundaciones y Asociaciones, según establece el art. 35.1º del CC<sup>50</sup>, tienen personalidad en el momento en que quedan constituidas y, desde entonces, podrán adquirir la nacionalidad española.

Por tanto, nos encontramos con que no solo las personas físicas pueden gozar de la adquisición de la nacionalidad española y de todos los beneficios que ésta comporta, sino que también podrán tener nacionalidad española las personas jurídicas (Corporaciones, Fundaciones y Asociaciones) al ostentar capacidad jurídica, independientemente de las personas físicas que las hayan creado y las integren.

---

<sup>50</sup> Art. 35.1º del CC *“Son personas jurídicas: 1.º Las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la ley. Su personalidad empieza desde el instante mismo en que, con arreglo a derecho, hubiesen quedado válidamente constituidas”*.



## 5 – CONCLUSIONES.

**PRIMERA.** Que la nacionalidad pueda ser tratada desde dos perspectivas distintas (sociológica y jurídico-política) muestra que se trata de un concepto que es tomado en consideración desde un punto de vista formal (las leyes) y desde otro punto de vista no formal (la nacionalidad entendida como condición que ostenta un conjunto de personas distinguidas por factores de tipo personal). Es decir, cuando nos referimos a la nacionalidad desde la perspectiva jurídico-política, nos referimos a las distintas definiciones que establecen los cuerpos legales de la misma (el CC, el Convenio Europeo sobre Nacionalidad, etc.). En cambio, cuando la tratamos desde la perspectiva sociológica, nos referimos a la condición de nacionales que adquieren un grupo de personas por estar íntimamente ligadas por distintos factores como el idioma, la raza, las costumbres, etc.

**SEGUNDA.** Cada individuo que ostente la nacionalidad española debe tener una vecindad civil, pues ésta determina la Ley personal aplicable a cada nacional. Es decir, resulta necesario que todo español sepa a qué derecho común o foral está sometido.

**TERCERA.** En cuanto a considerar la nacionalidad como una materia que debe ser regulada y desarrollada como un derecho fundamental, señalar que, aun existiendo diversas opiniones al respecto, no se trata de un derecho fundamental. Ello es así porque la CE no contempla la nacionalidad en el elenco de materias recogidas como derechos fundamentales (Sección I del Capítulo II del Título I). A ello se le añade que la regulación de la misma no precisa de Ley Orgánica para su desarrollo (como sí lo precisan todos los derechos fundamentales), sino una Ley Ordinaria. Además, se trata de una materia que cada Estado regula como estime oportuno. La nacionalidad española no es un derecho fundamental de la persona en el sentido empleado por la CE de 1978.

**CUARTA.** En la nacionalidad, en general, las personas no pueden ejercer su autonomía de la voluntad. Estamos ante una condición que el Estado va a otorgar siempre que se cumplan ciertos requisitos y se respeten las vías establecidas para ello.

**QUINTA.** La nacionalidad es una materia proclive a traducir, en términos jurídicos, el particularismo de cada Estado. Por ello, como no podría ser de otra forma en esta materia, cada Estado establece unilateralmente sus propios criterios.

**SEXTA:** En general, las actuaciones registrales en materia de nacionalidad son recurribles en apelación y, posteriormente, ante los Tribunales de la vía jurisdiccional

civil, salvo los actos de la Administración sujetos al Derecho Administrativo, que lo serán ante la jurisdicción Contencioso Administrativa.

**SÉPTIMA.** El *ius sanguinis* es el criterio preferente, mientras que el *ius soli* únicamente opera en relación con los supuestos residuales cuando la persona no sea española con arreglo al criterio del *ius sanguinis*, evitándose así la apatridia de ciertas personas nacidas en España.

**OCTAVA.** El criterio del *ius sanguinis* y del *ius soli*, que se remontan a tiempos muy lejanos, siguen aún vigentes hoy en día. Se trata de la adquisición de la nacionalidad española de manera originaria mediante “la sangre” o “el suelo”, lo que supone, para aquellas personas que lo adquieren de tal modo, no tener que prestar una declaración de voluntad como sí requieren otros casos de adquisición de la nacionalidad española no automática.

**NOVENA.** Por “españoles de origen” se entienden aquellos que adquieren la nacionalidad española de forma automática (arts. 17.1ª.a), b), c), d) y art. 19.1 del CC) o por opción (art. 20.1.c) del CC que se remite al art. 17.2 y al art. 19.2 del CC) y los hijos y nietos de padres originariamente españoles según la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

**DÉCIMA.** Tienen la nacionalidad española “no originaria”, cumpliendo los requisitos establecidos, aquellos que la adquieren por derecho de opción (arts. 20.1.a) y b) del CC), por naturalización (carta de naturaleza, art. 21.1 del CC y por residencia, art. 21.2 del CC) y por último, por posesión y utilización de la nacionalidad según el art. 18 del CC.

**DÉCIMO PRIMERA.** Con la carta de naturaleza se concede la nacionalidad española a personas que tienen una fuerte vinculación con España o son “premiados” con ello por haber conseguido algún mérito. La misma se otorga por el Consejo de Ministros de manera discrecional (art. 21.1 del CC). La residencia (art. 21.2 del CC) es otra de las vías previstas. Es la forma más recurrente para la adquisición de la nacionalidad, teniendo que cumplir el interesado con los requisitos de residencia legal y continuada en España durante el tiempo legalmente establecido. Además, el interesado tiene que tener buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española.

**DÉCIMO SEGUNDA.** Con la posesión de estado (art. 18 del CC) el interesado puede consolidar su nacionalidad española al haber tenido fuerte vinculación con ésta,

siempre y cuando concurren los requisitos de buena fe, posesión continuada, justo título y título anulado único, inscrito en el Registro Civil que, por sí mismo, es causa de la adquisición de la nacionalidad y que, en un momento posterior, es impugnado.

**DÉCIMO TERCERA.** La opción (arts. 20.1 a) y b) del CC), requiere por parte del interesado optar por la nacionalidad española, ya que ha estado sujeto a la patria potestad de un español o, bien, porque su madre o padre hubiera sido originariamente español o nacido en España.

**DÉCIMO CUARTA.** Las Corporaciones, Asociaciones y Fundaciones también pueden disponer de la nacionalidad española desde el momento en que se constituyan con arreglo a los requisitos legalmente establecidos.

## BIBLIOGRAFÍA.

- ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, AURELIA, *Nacionalidad Española. Normativa vigente e interpretación jurisprudencial*, Aranzadi, Navarra, 2008.
- CARRASCOSA GONZÁLEZ, JAVIER, *Derecho español de la nacionalidad. Estudio práctico*. Comares, Granada, 2011.
- CAZORLA GONZÁLEZ, MARÍA JOSÉ, *La adquisición de la nacionalidad española por descendientes de españoles. Pasado, presente y futuro*, en “Manual Básico de Derecho y ciudadanía española en el exterior” (Director PÉREZ GÁLVEZ, JUAN FRANCISCO), Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2008. Páginas 25-57.
- PALAO MORENO, GUILLERMO, (Junto con CARLOS SPLUGUES MOTA y MANUEL DE LORENZO SEGRELLES) 3ª Edición, *La nacionalidad y el derecho de la nacionalidad en un mundo integrado*, en “Nacionalidad y Extranjería”, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2006. Páginas 23-36.
- PARRA LUCÁN, MARÍA ÁNGELES, *La vecindad civil*, en “Derecho de la Persona, curso de Derecho Civil (I), Volumen II” (Coordinador DE PABLO CONTRERAS, PEDRO), Edisofer S.L., Madrid, 2016. Páginas 201-216.
- SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, ÁNGEL, *La adquisición de la nacionalidad: los ordenamientos jurídicos español y portugués. Revista Jurídica del Notariado. Números 97-98*. Enero-junio 2016. Páginas 11-110.
- VIÑAS FARRÉ, RAMÓN, “*Evolución del derecho de nacionalidad en España: continuidad y cambios más importantes*”, Trabajo de Fin de Grado, Universidad de Barcelona.

## **LEGISLACIÓN.**

- Código Civil de 1889.
- Constitución Española de 1978.
- Convenio Europeo sobre Nacionalidad de 6 de noviembre de 1997.
- Convención sobre los derechos del niño de 20 de noviembre de 1989.
- Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948.
- Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea de 1957.
- Ley 8 de junio de 1957, del Registro Civil (vigente hasta el 30 de junio de 2017)
- Real Decreto 1347/1969, de 26 de junio, por el que se reglamenta la opción de nacionalidad prevista en el Tratado sobre retrocesión del territorio de Ifni.
- Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, sobre opción de la nacionalidad española por parte de los naturales del Sahara.
- Real Decreto 2987/1977, de 22 de octubre, sobre concesión de la nacionalidad española a determinados guineanos.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
- El Real Decreto 39/1996, de 19 de enero, sobre concesión de la nacionalidad española a los combatientes de las Brigadas Internacionales en la guerra civil española.
- Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
- Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
- Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad.
- El Real Decreto 453/2004, de 18 de marzo, sobre concesión de la nacionalidad española a las víctimas de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004.
- Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del DNI.
- Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior.
- Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.
- Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional.
- Real Decreto 1792/2008, de 3 de noviembre, sobre concesión de la nacionalidad española a los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales.
- Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

- Real Decreto 453/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
- Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España.
- Real Decreto 893/2015, de 2 de octubre, por el que se concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a determinados sefardíes originarios de España.
- Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia.
- Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, aprobado por Real Decreto 1004/2015.
- Decreto de 14 de noviembre de 1958 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley del Registro Civil.

## **JURISPRUDENCIA.**

- Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, num. 285/2012, de 21 de mayo.
- Sentencia de la Audiencia Nacional, sala de lo Contencioso – Administrativo, num. 611/2016, de 26 de octubre.

## ANEXOS.

[http://aranzadi.aranzadidigital.es/maf/app/delivery/offload/get?\\_ =](http://aranzadi.aranzadidigital.es/maf/app/delivery/offload/get?_=)

THOMSON REUTERS  
ARANZADI

### Solicitud de adquisición de la nacionalidad española por opción (menores entre 14 y 18 años). FOR\2013\27

AL SR. JUEZ ENCARGADO DEL REGISTRO CIVIL DE .....

D./Dª ..... , mayor de edad, de estado civil ..... , nacionalidad ..... , vecino de ..... , con domicilio en ..... y provisto de documento de identificación/pasaporte/tarjeta de residencia nº ..... , con ..... , asistido de mis padres, ..... , con teléfono nº .....

D. .... , mayor de edad, de estado civil ..... , nacionalidad ..... , vecino de ..... , con domicilio en ..... y provisto de ..... , y Dª ..... , mayor de edad, de estado civil ..... , nacionalidad ..... , vecina de ..... , con domicilio en ..... y provista de .....

SOLICITA

La incoación del preceptivo expediente para la adquisición de la nacionalidad española por haber estado sujeto a la patria potestad de un español, por haber adquirido su madre y/o padre la nacionalidad española.

JURAMENTO/PROMESA

Atendiendo a lo preceptuado en el artículo 23 del Código Civil, JURO renunciar a mi anterior nacionalidad, la ..... , y así mismo JURO obedecer las leyes y la Constitución Española.

VECINDAD CIVIL.-

Así mismo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del código Civil, se opta por la vecindad civil .....

PRUEBA.-

Se portan junto con el presente escrito los siguientes documentos que acreditan los hechos expuestos.

Documento núm. 1.- Certificado de empadronamiento en el municipio de .....

Documento núm. 2.- Certificado literal de nacimiento.

Documento núm. 3.- Certificado literal de nacimiento con la inscripción marginal de la adopción constituida en España o en el extranjero.

Documento núm. 4.- Certificado literal de nacimiento del padre/madre/progenitores del inscrito o certificado literal de adopción.

Documento núm. 6.- Copia compulsada del pasaporte.

Documento núm. 5.- .....

En virtud de cuanto antecede,

SUPlico DEL SR. ENCARGADO DEL REGISTRO CIVIL DE ..... el señalamiento de día y hora para efectuar la comparecencia y hacer la manifestación de voluntad de la opción, y tras los trámites oportunos de decreto la nacionalidad española por opción respecto de mi persona.

En ..... , a ..... de ..... de 20 .....

Fdo.: Padre	Fdo.: Madre	Fdo.: Menor
-------------	-------------	-------------

05 de mayo de 2017

© Thomson Reuters

1

**Solicitud de adquisición de la nacionalidad española por carta de naturaleza.**  
**FOR2011\79**

**AL GOBIERNO**

El abajo firmante, D. .... mayor de edad, casado, profesión ..... , con domicilio en ..... , que se identifica con Autorización de Residencia num. .... , ante el Excmo. Consejo de Ministros del Gobierno de España, por conducto del Ministerio de Justicia, por medio del presente escrito, comparece y como mejor proceda, dice:

- Que por medio del presente escrito promuevo expediente para la concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza en base a los siguientes **HECHOS** :

1º Que es mayor de dieciocho años y ostenta la capacidad exigida por la ley española para formular la presente petición.

2º Que ostenta la nacionalidad ..... y en la actualidad está casado con ..... , de cuyo matrimonio tiene dos hijos sujetos a la patria potestad, de nombres .....

3º Que no se encuentra procesado ni tiene antecedentes penales

4º Que ha residido en España, con permiso de residencia, en los siguientes periodos y lugares .....

5º Que en el solicitante concurren circunstancias excepcionales para instar la correspondiente concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza porque .....

6º que se propone residir permanentemente en España con su familia

7º que se compromete a renunciar a su nacionalidad anterior, prestar obediencia a la Constitución españolas y a las leyes así como juramento de fidelidad al S.M. el Rey.

8º Que desea poseer la vecindad civil de .....

**PRUEBAS Y DILIGENCIAS QUE SE ACOMPAÑAN:**

-Documental .....

En virtud de lo expuesto,

**SOLICITA** : Que previo los trámites oportunos, le sea concedida la nacionalidad española por carta de naturaleza.

En ..... , a .... de .... de ....

Firma .....



**Solicitud de adquisición de la nacionalidad española por residencia (plazo de un año).**  
**FOR\2011\81**

**AL REGISTRO CIVIL DE ..... PARA ANTE EL MINISTERIO DE JUSTICIA**

D. ...., mayor de edad, casado, profesión ..... apátrida, con domicilio en ..... , que se identifica con Autorización de Residencia núm. ...., ante el Excmo Sr. Ministro de Justicia, por conducto del Sr Juez Encargado del Registro Civil de ..... , por medio del presente escrito, comparece y como mejor proceda, dice:

**HECHOS**

- 1) El compareciente D. .... hijo de ..... y de ..... , nació en ..... el día .... de ..... de ....
- 2) Contrajo matrimonio civil/ canónico el .... de ..... de .... con la súbdita española Dª ..... , que se encuentra registrada en el Consulado General de España en ..... al tomo ..... página ....
- 3) Vine a España el .... de ..... de .... , en calidad de apátrida, habiendo obtenido desde entonces permisos de residencia en España, hablo castellano y estoy adaptado a las costumbres y modo de vida españoles
- 4) Desde mi llegada a España no he salido de sus fronteras y es mi propósito fijar definitivamente mi residencia en territorio español, y para ello cuento con medios de vida suficientes

**FUNDAMENTOS DE DERECHO**

- I. El artículo 22 número 2, letra d) del Código civil que prevé que para adquirir la nacionalidad española, será suficiente el plazo de un año cuando .....
- II. El artículo 22.3 del Código Civil, exige que la residencia sea legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición, requisito que cumplo.
- III El artículo 220 del Reglamento del Registro Civil, en donde se establecen los requisitos para adquirir la nacionalidad y que el que suscribe reúne.
- IV. Prometo renunciar a mi condición de apátrida o la nacionalidad que pudiere corresponderme por nacimiento, y prestar juramento de obediencia a la Constitución española y demás leyes y fidelidad a S.M. el Rey.

Por todo ello,

**SUPLICO**

Que teniendo por presentado este escrito con los documentos a que se hace mención, se digne a admitirlo, y previos los trámites legales oportunos, se eleven las actuaciones al Excmo Sr. Ministro de Justicia, con informe favorable, y que por V.E. se dicte resolución concediendo al que suscribe la nacionalidad española.

**OTROSÍ DIGO :** En justificación de los hechos anteriormente manifestados, solicito la admisión de los siguientes medios de PRUEBA:

- DOCUMENTAL, consistente en Certificación de Matrimonio; literal de nacimiento de mi esposa; autorización de residencia y certificación de la Comisaría General de Documentación ( Fronteras y extranjeros) en la que se acredita mi entrada en España, la continuidad ininterrumpida y la carencia de antecedentes desfavorables. Certificación relativa a retribución y haberes que percibo; y certificación del Registro Central de Penados y rebeldes.

- Audiencia del solicitante, a efectos de comprobar su grado de adaptación a la cultura y estilo de vida españoles.

-Testifical del cónyuge del solicitante ..... , a estos mismos efectos, a cuyo efecto comparecerá voluntariamente el día y hora que se señale.

- Más testifical, de D. .... y D. .... testigos idóneos que comparecerán voluntariamente en el día que se le señale

En ..... , a .... de .... de ....

Firma .....